



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-008-2016-01190-01
Demandante: Henry de Jesús López Marín
Demandado: Instituto Nacional de Vías “Invías”, DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S.
Asunto: Apelación
Procedencia: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Contrato laboral, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones moratorias, aportes a pensiones

Medellín, mayo siete (07) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la parte demandante, así como por la codemandada Invías, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 19 de enero del 2021, en el proceso Ordinario laboral de primera instancia instaurado por el Señor HENRY DE JESÚS LÓPEZ MARÍN en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, DPC INGENIEROS S.A.S. Y MS

INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., Radicado 05001-31-05-008-2016-01190-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor HENRY DE JESÚS LÓPEZ MARÍN, instauró demanda ordinaria laboral, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, DPC INGENIEROS S.A.S. Y MS INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., pretendiendo se ordene pagar solidariamente salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones de todo el tiempo laborado; sanción por el no pago de intereses de cesantías; indemnización por despido sin justa causa; sanción por no consignar las cesantías; indemnización por falta de pago; cotización a pensiones en Protección S.A. por todo el tiempo, conforme al IBC; sanción de ineficacia de terminación del contrato de la Ley 789 de 2002.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el actor laboró bajo la dependencia y subordinación continúa de las demandadas, por medio de un contrato verbal, desde el 14 de agosto del 2013 hasta el 8 de octubre del 2014, ejecutando las labores de inspector de obras de interventoría en Salgar, Urrao, Hispania, Armenia y Andes, trasladándose de un lugar a otro en moto de su propiedad, encargándose de recibir obras ejecutadas, asistir en el recibo y revisión de la documentación para la liquidación de los contratos de obra civil del módulo 4, con el ingeniero director de obra, señor Rodrigo Ortiz Esparza, así mismo, en compañía del señor Juan Guillermo Lopera, coordinador de Invías, realizó visita a la obra de Salgar en la vereda Montebello el 31 de mayo del 2014; en Hispania, vereda Armenia Alta-la Herradura, realizó visita a la obra civil con un funcionario de la contraloría y de la Alcaldía, para atender quejas de los usuarios de la vía, el día 15 de mayo del 2014; en Urrao, en la obra el Bordo- la Aná, en las veredas que llevan el mismo nombre, realizó visita para el recibo final de la obra en junio del 2014, con el director de la obra, señor José David Román, la cual no

se pudo recibir, por deslizamiento de un muro, siendo necesario elaborar diagnóstico, planeación y ejecución de las obras para reemplazar el muro, con la supervisión de su jefe, director de la obra de interventoría, participando luego en el acto de recibir esta obra y liquidación del contrato.

Asevera que toda la labor realizada por el accionante, era supervisada y aprobada por el ingeniero Rodrigo Ortiz Esparza, quien era su jefe inmediato, explicando que en la oficina de Medellín, se realizaban labores de logística, siendo el actor, asistente del ingeniero antes mencionado, encargándose de recibir documentos para la liquidación de contratos, entregaba documentos a otras entidades, coordinaba y ejecutaba tareas de impulso de cada gestión de obra encomendada, recibiendo como asignación básica, la suma de \$1.200.000, con una prima de transporte por \$700.000, siendo la jornada laboral, la ordinaria, aunque a veces se extendía a los domingos, festivos y nocturnos.

Explica que las sociedades DPC Ingenieros S.A.S. y M.S. Ingenieros Colombia S.A.S., conformaron el Consorcio DM 016, para realizar los trabajos de interventoría con Invías, para la ejecución del contrato 1080 del 2013, cuyo objeto era realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mantenimiento de vías, programa caminos de prosperidad, Departamento de Antioquia, módulo 4.

Agrega que la afiliación en pensiones, se realizó 16 días después de haber iniciado el vínculo, sobre un salario inferior, además no se le consignaron las cesantías en un fondo., siendo despedido el 8 de octubre del 2014, por medio de correo electrónico, donde se le indica que laboró hasta el 9 de mayo del 2014, adeudándole salarios, prestaciones sociales y sanciones moratorias.

1.2.- CONTESTACIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS” manifestó que es cierto que las sociedades demandadas conformaron el consorcio mencionado, para la

ejecución del contrato de interventoría 1080 de 2013, donde se pactó en agosto 6 de ese año y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013, una interventoría de la cual da cuenta el mencionado contrato; frente a los demás hechos de la demanda, indicó que los mismos no le constan.

Como medios exceptivos de defensa, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; pago.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 19 de enero del 2021, el juzgado de conocimiento condenó solidariamente a Invías, a DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., a pagar los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, en la AFP en la que se encuentre afiliado el actor o la que éste elija, correspondiente a 8 días del mes de mayo del 2014, teniendo en cuenta para ello, un salario de \$1.200.000, con los intereses de mora, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, toda vez que no se demostró que el empleador hubiese efectuado aportes por dicho lapso; costas a cargo de la parte demandada, fijándose agencias en derecho en la suma de \$908.526 a cargo de cada accionada.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del actor interpuso el recurso de apelación indicando que el artículo 77 del CPL en su numeral 2, se refiere a las consecuencias de la inasistencia de las partes, a la audiencia primera de trámite y conciliación y en el numeral segundo se manifiesta que el Juez declarará confeso al accionado los hechos susceptibles de confesión, en este caso, no era necesario que la parte actora lo solicitara, aunque lo hizo en su oportunidad, cuando vio que el

Despacho no lo declaró e insistió en el indicio en la segunda audiencia, indicando la Juez que se manifestaría en la sentencia, solicitando se declare la confesión de los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11.

Así las cosas, se debe entender que si la parte demandada quería desvirtuar estos hechos, debió acreditarlos en su oportunidad, pero no lo hizo, por el contrario, en los interrogatorios de parte, los representantes legales de DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., confesaron los hechos que se pretenden en declaratoria de confesión, al reconocer los extremos temporales, y, cuando se les exhibió el folio 42, argumentaron que eran los únicos pagos realizados, los cuales no alcanzan a cubrir los salarios pactados.

Resalta que el actor tenía que revisar, entre 8 y 10 frentes, para hacerlo se movilizaba en su propia moto y en virtud de eso la compañía se ahorra dinero, de tal manera que debe entenderse que el salario es \$1.900.000.

Con los montos que aparecen acreditados como únicos pagos, no se cubre la totalidad de los emolumentos que tenía que recibir el actor en los extremos laborales, que lo son del 14 de agosto del 2013 que fue confesado en el folio 42, pretendiendo el interrogado afirmar que el vínculo inició el 1° de septiembre y que la relación inicial se dio por un contrato de servicios, pero no lo acreditó, indicando que suponía que ese contrato de prestación de servicios, lo debió haber hecho el jefe del actor, cosa que no hizo, teniendo evidencia que hubo salarios desde el 14 de agosto del 2013 y esa es la fecha del vínculo laboral que debe de reconocerse y la fecha de finalización, lo es el 8 de octubre de 2014, incluso se probó que laboró hasta el 15 de ese mes.

Por el interregno antes mencionado, se deben realizar todos los aportes, con base en el salario promedio, no con \$1.200.000, sino con \$1.900.000, porque esa prima es salario, no se pactó de manera escrita que no lo fuera, sobre esta suma no se le cotizó ni se le pagaron las prestaciones sociales, entonces la declaratoria de confeso tiene que darse para que se surtan todos los efectos

que se persiguen en el libelo genitor, además de que cada una de las sanciones invocadas son procedentes.

Agrega que no es cierto como lo afirma la demandada que la prima se pagaba unas veces sí y otras no, porque los frentes había que visitarlos todos los días, de tal manera que, si no desvirtuaron eso, no se le puede dar credibilidad a sus dichos, porque desde la remuneración se observa que hay mala fe, cuando en el folio 42, reconocieron que esos eran los únicos pagos realizados al actor, están reconociendo la mala fe con la que obraron, ya que esos pagos no alcanzan a pagar todos los emolumentos, es más, el día 60 transcurrió sin que la parte demandada acudiera al fondo de pensiones a cubrir esos aportes y han pasado varios años sin que lo haga, esto acredita la mala fe.

Cita apartes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 516 del 2013, que no califica la buena o mala fe, para aplicar la sanción de la Ley 50 de 1990, por no haber consignado las cesantías en su totalidad, con base en el salario de \$1.900.000, es el no pago lo que se sanciona.

En cuanto al artículo 65 del CST, sobre la mora en el pago de prestaciones sociales, la Corte ha sido reiterada en el sentido de indicar que se debe estudiar si hubo buena o mala fe, en este caso se tiene que decir que actuó de mala fe, porque teniendo un salario de \$1.900.000 como promedio, se da la información de que el salario era \$1.200.000 y que el resto era esporádico, considerando que las tres sanciones solicitadas son procedentes.

Para concluir afirma que Invías tenía la obligación, a través de su interventor, de revisar que a todos los trabajadores se les pagara el salario y ese salario promedio debía corresponder con los aportes, haciendo mal el interventor de Invías su trabajo, por esto se debe declarar la solidaridad.

Invías

La apoderada de la entidad, presenta inconformidad con la Sentencia, en lo relacionado con la condena solidaria a los aportes de seguridad social, con los consorciados, aduciendo que el desistimiento de la demanda, que hizo en su oportunidad el apoderado de la parte demandante, cuando incluso se había trabajado la Litis, tiene efectos de cosa juzgada y tiene el alcance de cobijar también a Invías, pues si bien el actor desistió del consorcio, es frente de este de quien se predica la solidaridad, que deprecó el actor en su libelo demandatorio y no de los consorciados, toda vez que el Invías no ha suscrito ningún contrato con los consorciados que hicieron parte del Consorcio DM 016.

El efecto ineludible del desistimiento del actor frente al Consorcio DM 016, no puede ser otro que el desistimiento del Invías, ya que como se dijo incluso por el demandante y se probó, al actor lo contrató el Consorcio DM 016, todos los pagos fueron realizados por el mismo y la relación laboral que sostuvieron fue en virtud del contrato que el Invías suscribió con el Consorcio, de suerte que si el actor, desistió de su demanda contra el Consorcio, no es posible predicar que el Invías siga en esta demanda.

Adicionalmente se reitera que los periodos reclamados por el actor, exceden el contrato que el Invías suscribió con el mencionado Consorcio, tanto en el interregno anterior, como posterior y se reitera que el contrato suscrito con el Consorcio, fue suspendido entre el 21 de marzo del 2014 y el 29 de enero del 2015, de suerte que todas las obligaciones que tenía el Invías con el Consorcio, corrían igual suerte y no puede derivarse ninguna obligación solidaria en ese interregno, solicitando al Superior, se mantengan incólumes las decisiones, salvo lo relacionado con la solidaridad en los aportes y demás condenas.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de las codemandadas MS Ingenieros Colombia S.A.S y DPC

Ingeniería S.A.S., indicando que si bien el accionante recibía órdenes del señor Rodrigo Ortiz Esparza, el mismo no era el autorizado para ello y en ese sentido no se podría enmarcar dicha actuación, dentro del margen de la subordinación, ya que no fue el empleador quien impartió las órdenes, reconociendo la existencia de una relación laboral entre las partes, desde el 2 de septiembre del 2013 y hasta el 9 de mayo del 2014, explicando que las certificaciones suscritas por el señor Rodrigo Ortiz Esparza, hoy fallecido, no tienen validez, así como la suscrita por el señor Edgar Javier Pulido, residente del contrato de interventoría.

Expresó que para los años 2013 y 2014, el actor devengaba un salario de \$1.200.000, valor sobre el cual se realizaban los descuentos de ley, cancelándose por rodamiento \$700.000, valor que no es factor salarial y que se cancelaba esporádicamente, dependiendo de las actividades desplegadas por el trabajador, para ello el demandante presentaba cuenta de cobro. Además, se efectuaron los aportes a pensiones y se consignaron las cesantías del 2013.

En cuanto a que se le terminó el contrato de trabajo al actor sin justa causa, explica que el contrato surgió, por el contrato de interventoría suscrito con Invías, una vez finaliza éste, fenece cualquier tipo de vinculación. Agrega que las demandadas se encuentran a paz y salvo con el actor por todo concepto, no existiendo derecho a la sanción moratoria, solicitando se confirme la providencia de primera instancia.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el

artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos:

- Que el demandante le solicitó a Invías lo hoy pretendido el 22 de julio del 2016 –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folios 29 a 31-
- Que Envías y el Consorcio DM 016, celebraron el contrato 1080 de 2013, cuyo objeto era que el interventor se obligaba a realizar las labores de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mantenimiento de vías del programa caminos de prosperidad-departamento de Antioquia, cuyo plazo iba hasta el 31 de diciembre del 2013 (módulo 4), el cual se prorrogó hasta el 2 de julio del 2014; luego se prorrogó del 29 de abril al 31 de mayo del 2015; del 31 de mayo al 31 de diciembre del 2015; del 31 de diciembre del 2015 al 30 de abril del 2016; del 30 de abril al 31 de julio del 2016 –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folios 93 a 109-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala si:

¿Si entre el actor y el Consorcio DM 016, existió una relación de tipo laboral entre el 14 de agosto del 2013 y el 8 de octubre del 2014?

¿Si es viable declarar confesos a los representantes legales de las sociedades DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., respecto a los hechos de la demanda por haber inasistido a la audiencia de conciliación?

¿Si hay lugar a condenar a las demandadas, al reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del CST, así como la sanción del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, determinando si se acredita la mala fe?

¿Si la denominada prima de movilidad o de rodamiento, hace parte de la base salarial para liquidar salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en pensiones?

¿Si hay lugar a realizar un reajuste en las cotizaciones a pensiones, teniendo en cuenta los periodos no cancelados?

¿Si el Invías es solidariamente responsable, de los conceptos que se reconocieron al demandante?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, entre el demandante y el Consorcio DM 016, efectivamente existió una relación de tipo laboral, en unos extremos diferentes a los indicados por la a quo, haciéndose necesario MODIFICAR el numeral primero de la Sentencia, declarando que entre el actor y el Consorcio DM 016, conformado por las sociedades DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., existió una relación laboral entre el 14 de agosto del 2013 y el 20 de septiembre del 2014; que el Invías es solidariamente responsable de los conceptos reconocidos al actor; que las demandadas deben cancelar al actor la suma de \$5.187.343, por concepto de reajuste de salarios y prestaciones sociales; que las demandadas deben realizar los aportes en pensiones a favor del demandante a

Protección S.A. o al fondo en el que se encuentre afiliado, por los periodos comprendidos entre el 14 y el 31 de agosto del 2013 y el 2 de mayo al 20 de septiembre del 2014, sobre un IBC de \$1.200.000; CONFIRMANDO la providencia en las demás partes.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Conforme al artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

El artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

En desarrollo de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, respecto a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL 39259 del 17 de abril de 2013 y SL 4027 del 08 de marzo de 2017 (45344), veamos:

“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”

2.6.- CASO CONCRETO

Sobre la declaratoria de confeso de los representantes legales de los consorciados

Se duele el apoderado de la parte actora en su recurso de apelación, del hecho de que la Juez afirme en su providencia, que no declaró confeso a los representantes legales de las codemandadas DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., por no asistir a la audiencia de conciliación, bajo el argumento de que esto no fue solicitado por la parte actora, en dicha diligencia, que era la oportunidad legal correspondiente, considerando que dicha consecuencia, la debió aplicar de manera inmediata, sin que fuere necesario que mediara solicitud de parte.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1849 del 17 de febrero de 2016, en cuanto al alcance de la confesión ficta prevista en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y la competencia exclusiva del Juez de Primera instancia.

“No encuentra la Sala en la sentencia impugnada configurado ningún error fáctico, en cuanto a la presunta omisión de la confesión ficta de la demandante, al no haber asistido a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, y al no haberse presentado a la diligencia del interrogatorio de parte, toda vez que lo acreditado por las diligencias es que el juez de primera instancia no fijó en ningún momento dicha consecuencia procesal, en los términos de los artículos 77 del C.P.T. y de la S.S. y 210 del C.P.C., ante la ausencia de la parte demandante a las mencionadas audiencias.

En efecto, si bien se observa que la demandante no asistió a la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, celebrada el 26 de agosto de 2002, el fallador de primer grado no estableció la confesión prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., ante la inasistencia, y las entidades demandadas guardaron silencio frente a esta decisión (folio 226 del cuaderno principal), de modo tal que se equivoca la censura, al endilgarle al ad quem la falta de

apreciación de una confesión que no existe dentro del plenario.

Tampoco se observa que el sentenciador de primera instancia haya declarado la confesión ficta prevista en el artículo 210 del C.P.C., ante la inasistencia de la demandante a la diligencia de interrogatorio de parte, en el sentido de haber fijado como ciertos los hechos contenidos en las contestaciones a la demanda, susceptibles de confesión, tal como consta en el acta de folio 257 del cuaderno principal. Allí se encuentra que, a pesar de que las entidades demandadas alegaron la aplicación de los efectos del artículo 210 del C.P.C., el juez omitió pronunciarse frente a esta solicitud, sin que aquéllas manifestaran inconformidad alguna, utilizando para tal efecto el mecanismo procesal idóneo.

Y es que lo pretendido por la censura, en últimas, es que esta Corporación, por vía del recurso extraordinario de casación, declare la confesión ficta ante la inasistencia de la demandante a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, y a la diligencia de interrogatorio de parte, en desconocimiento de la jurisprudencia reiterada y constante de esta Sala, según la cual esta función corresponde exclusivamente al juez de primera instancia, ante quien se celebran las respectivas audiencias previstas por la ley procesal del trabajo y de la seguridad social, por lo que, ante la ausencia de declaratoria de la confesión o el incumplimiento de las condiciones jurisprudenciales (ver sentencias SL7145- 2015 y CSJ SL, 22 jun. 2007, rad. 30560, reiterada más recientemente en la providencia SL1560-2014), no puede la Corte entrar a subsanar este aspecto.

Conforme con lo antes expuesto, en la audiencia de conciliación la Juez simplemente indicó, que no había comparecido la parte demandada, sin hacer referencia frente a la confesión ficta que procedía y sin que el apoderado del actor presentara reparo alguno, no pudiendo venir ahora el mismo profesional del derecho, a solicitar se aplique la declaratoria de confeso a los representantes legales de las consorciadas, a efectos de obtener la prosperidad en sus pretensiones.

En cuanto a los extremos de la relación laboral existente entre el demandante y el Consorcio DM 016

La señora Juez, concluyó que la relación laboral que vinculó a las partes, se dio entre el 2 de septiembre del 2013 y el 9 de mayo del 2014, presentando oposición la parte demandante con dicha conclusión, por cuanto, asevera, el extremo inicial data del 14 de agosto del 2013, siendo la fecha final el 8 de octubre del 2014, incluso, asevera, se podría tratar del 15 del mismo mes y año.

A efectos de acreditar lo indicado por el recurrente, encontramos certificación expedida por el Consorcio DM 016 del 25 de septiembre, sin especificarse de que año, en la cual hacen constar que el actor laboró para ellos, desde el 2 de septiembre de 2013 hasta el 9 de mayo de 2014, es decir, en los extremos establecidos por la a quo, desempeñando el cargo de inspector de interventoría, para el contrato de interventoría 1080/13 cuyo objeto era la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para mantenimiento de vías programa caminos de prosperidad departamento de Antioquia módulo 4 –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folio 34-.

Aparece certificación expedida por el señor Rodrigo Ortiz Esparza, en calidad de director de obra de interventoría del contrato 1080 de 2013, fechada el 20 de septiembre de 2014, en la cual hace constar que a la fecha, el actor se encuentra laborando para el Consorcio DM 016, como inspector de obra de interventoría, dedicado a realizar visitas a la obra de Salgar- Montebello, a la supervisión en la ejecución de obras faltantes en el contrato 186 de 2013, suscrito entre Urrao y el Consorcio GG Urrao para la obra "mantenimiento y mejoramiento de la vía el Bordo- la Aná en el municipio de Urrao", así como colaborando en la elaboración del acta final y revisión de la documentación tendiente a la liquidación del contrato, documento que expide en atención a que el demandante manifiesta que desde el 23 de mayo de 2014 y hasta el momento, no le había sido consignado su salario, como tampoco había recibido notificación de terminación del contrato –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folio 35-.

Sobre esta certificación, vale la pena indicar, de una vez, que quien la expide, es el señor Rodrigo Ortiz Esparza, quien fue reconocido como como director de obra del Consorcio DM 016, y jefe inmediato del actor, tal y como se desprende de los interrogatorios de parte rendidos por el demandante, así como por los representantes legales de las consorciadas, documento que tiene plena validez, al provenir de uno de los representantes del empleador.

Cabe recordar que sobre el valor probatorio de las certificaciones laborales la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia reiterada y pacífica ya señalado que su contenido debe tenerse como cierto, salvo que sea desvirtuado por el empleador, así se recordó en sentencia del 29 de septiembre del 2020, magistrada ponente doctora Dolly Amparo Caguasango Villota, SL 3673 (66135):

...‘El contenido de las aludidas certificaciones debe reputarse como cierto, a menos que el empleador demandado acredite fehacientemente, que lo registrado en ellas no sea conforme a la verdad, o lo desvirtúe con otros medios de convicción, lo que no ocurrió en el presente caso. De ahí que, la simple alusión de la parte recurrente de que tales documentos fueron expedidos para hacer un «favor», carezca de la contundencia suficiente para desvirtuar su contenido.

Es más, en varias oportunidades la Corte ha indicado que el funcionario judicial debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se expresa en este tipo de constancias, pues son emanadas de quien se anuncia como empleador, se certifican labores subordinadas, el tiempo de servicios e incluso el salario. Y se hace notar que no es usual que quien no tenga tal calidad falte a la verdad y «dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas».

Así, sobre este tipo de documentos emitidos por el empleador, en sentencia CSJ SL14426-2014, en la que se reiteró el criterio expuesto en los fallos CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748, CSJ SL, 24 ag. 2010, rad. 34393, y CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666, la Corte precisó:

La fuerza de los anteriores medios de convicción que viene del hecho de que en tres ocasiones se certificara el extremo inicial del vínculo laboral, como también de que proviniera de esas dos sociedades —diferentes de por sí-, permitía infirmar y dejar sin piso la declaración que hizo el promotor del juicio en el interrogatorio de parte vertido en el Consulado General de Colombia en los Estados Unidos.

Sobre el valor probatorio de los certificados laborales, esta Sala de Casación en sentencia CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748, CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 34393, CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666, señaló:

El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que

comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral”...

Adicionalmente, fue aportada la liquidación del contrato de trabajo del accionante, apareciendo como extremos del mismo, el 2 de septiembre del 2013 al 9 de mayo del 2014 –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folio 43-.

Finalmente, en la respuesta dada por el Consorcio DM 106 al actor, el 13 de mayo del 2015, se relacionan los pagos realizados al mismo, figurando como primera nómina, la correspondiente a la quincena del 14 al 31 de agosto del 2013, por valor de \$720.000 -documento 01.expediente completo escaneado digital folio 42-.

Lo anterior coincide con lo expresado por el actor en su interrogatorio de parte, en el sentido que empezó a laborar en agosto del 2013, iniciando visitas de obras el 13 de agosto del 2013, las que se hacían para evaluar las actividades que iban a desarrollar y terminaron obras físicas en el municipio de Urrao, en donde tuvieron un inconveniente con un muro que se derrumbó, finalizando en septiembre del 2014, aclarando que seguía todo lo relacionado con la papelería, actas y liquidaciones y que él continuó con eso, hasta el 8 o 10 de octubre del 2014.

Contrastado con lo anterior, el representante legal de la codemandada DPC Ingenieros S.A.S., afirmó que el actor inició el 14 de agosto del 2013, una labor como contratista independiente, realizando unas visitas previas a la iniciación del trabajo, existiendo una factura fechada el 2 de septiembre, en donde el demandante cobra por las visitas que adelantó, del 14 al 31 de agosto del 2013, \$720.000, mostrando en la cámara, una parte del documento que el mismo

identifica como factura, sin embargo, no fue admitida dicha prueba, recordando que las demandadas, no dieron respuesta a la demanda.

Narró el referido representante legal, que el contrato de prestación del servicios del actor inició el 2 de septiembre del 2013, tal y como lo indica el acta de iniciación de Invías y que la relación laboral se dio hasta el 9 de mayo del 2014, explicando que si se remiten al acta de liquidación del contrato de interventoría, se puede constatar que el mismo, estuvo suspendido desde el 21 de marzo del 2014, hasta el 29 de enero del 2015, pero que como ya habían contratado el personal, esperaron un poco para saber si podían seguir adelante, sin embargo, como las condiciones del contrato no se dieron y se ampliaron las suspensiones, se vieron en la necesidad de finalizarle el contrato al accionante, el 9 de mayo del 2014. En este punto, se resalta que el interrogado hace referencia a que el acta de suspensión del contrato con Invías, está en poder de la parte actora, sin embargo, ésta no fue aportada al plenario, desconociéndose, de manera certera, en que periodos se dio la suspensión del contrato.

Así las cosas, las afirmaciones del representante legal de DPC Ingenieros S.A.S. no tienen soporte probatorio, llegando esta Sala de Decisión a la conclusión de que el contrato existente entre el actor y el Consorcio DM 016, se dio desde el 14 de agosto del 2013, atendiendo al contenido de la relación de pagos que le fue expedida al actor el 13 de mayo del 2015, por parte del Consorcio DM 016, en la cual se indica que cancelaron nómina por la quincena corrida entre el 14 y el 31 de agosto del 2013, reiterando que la parte accionada no logró acreditar la existencia del supuesto contrato de prestación de servicios que alega existió en este interregno.

Frente al extremo final, no puede desconocerse que de manera directa el jefe del empleador, ingeniero de obra, señor Rodrigo Ortiz Esparza, certificó el 20 de septiembre del 2014, que para esa fecha el demandante aún continuaba laborando al servicio del Consorcio DM 016 y que no se registraban pagos a

favor del demandante, desde el 23 de mayo de 2014, sin tampoco haber recibido notificación de la terminación del contrato, por lo tanto, se tendrá que el reclamante laboró hasta la fecha de expedición de dicha certificación.

Por lo anterior, se habrá de declarar que la relación laboral que unió al demandante con el Consorcio DM 016, conformado por las consorciadas DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., se dio entre el 14 de agosto del 2013 y el 20 de septiembre del 2014.

En lo relacionado con si la prima de movilidad o prima de transporte, constituye o no factor salarial

Los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, establecen que conceptos o elementos, constituyen salario, veamos:

“ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia proferida el 14 de octubre del 2020, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicado SL 4342 (84485), indicó que constituye salario “todo lo que

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte”, veamos:

...“ por regla general, todos los pagos recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos que: (i) se trate de prestaciones sociales; (ii) de sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador; (iv) los pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen un propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación, y (v) según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo: «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad» (CSJ SL1798-2018).

Entonces, como el supuesto del artículo 128 ibidem es una excepción a la generalidad salarial de los pagos realizados en el marco de una relación de trabajo, el legislador exigió un pacto expreso, claro y específico acerca de qué beneficios o auxilios extralegales no tienen incidencia salarial, de modo que no son eficaces las cláusulas globales o genéricas, como tampoco la interpretación o lectura extensiva de las estipulaciones contractuales a efectos de incorporar pagos que no fueron objeto de pacto, como equivocadamente lo hizo el ad quem en el presente asunto (CSJ SL1798-2018)...”

Se aduce en la apelación presentada por la parte actora, que la referida prima de movilidad que percibía el actor, si tenía la vocación de permanencia, por cuanto el demandante requería su moto de manera permanente, para movilizarse a los diferentes frentes de la obra, sin embargo, del documento 01.expediente completo escaneado digital folio 42, consistente en la certificación de pagos otorgada por el Consorcio DM 016, atendiendo a la acción de tutela que presentó el actor, se certifica que el pago de esa prima de transporte, solo se reconoció por los meses de noviembre y diciembre de 2013, sin presentarse la característica de la periodicidad requerida a efectos, de poder considerarla factor salarial, por lo que no es procedente tenerla en cuenta, a efectos de reliquidar salarios, prestaciones sociales, ni mucho menos cotizaciones a la seguridad social en pensiones.

En lo relacionado con que se reajusten los aportes a pensiones y las prestaciones sociales, sobre un IBC de \$1.900.000

Atendiendo al hecho de que no se accede a declarar que la denominada prima de transporte o de movilidad, constituya factor salarial, tal y como se indicó anteriormente, no es procedente ordenar el reajuste de los aportes a pensiones.

Salarios y prestaciones sociales

Atendiendo a los extremos laborales demostrados, esto es, del 14 de agosto del 2013 al 20 de septiembre del 2014, procede la Sala a liquidar los salarios y prestaciones sociales que se debieron reconocer al actor, sobre una base salarial de \$1.200.000, precisando que, al valor obtenido, se le habrá de restar la suma de dinero que ya le fue cancelada al mismo, por valor de \$17.924.399, atendiendo a la tantas veces nombrada certificación de pagos expedida por el Consorcio DM 016.

Es dable aclarar que respecto de la denominada prima de movilidad o prima de transporte, se tendrá en cuenta los valores que ya le fueron cancelados al demandante, en los meses de noviembre y diciembre del 2013, ya que como se explicó anteriormente, la misma no puede ser tenida en cuenta como factor salarial.

2013						
MESES	SALARIO	PRIMA DE SERVICIOS	CESANTIAS	INTERESES A LAS CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA DE TRANSPORTE
AGOSTO	\$680.000					
SEPTIEMBRE	\$1.200.000					
OCTUBRE	\$1.200.000					
NOVIEMBRE	\$1.200.000					\$2.079.000
DICIEMBRE	\$1.200.000	\$456.400	\$456.400	\$20.812	\$228.000	\$1.750.000
TOTAL PARCIAL	\$5.480.000	\$456.400	\$456.400	\$20.812	\$228.000	\$3.829.000
GRAN TOTAL						\$10.470.712

2014						
MESES	SALARIO	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES A	VACACIONE	SUBSIDIO

		DE SERVI CIOS		LAS CESANTIAS	S	DE TRANSPOR TE
ENERO	\$1.200.000					
FEBRERO	\$1.200.000					
MARZO	\$1.200.000					
ABRIL	\$1.200.000					
MAYO	\$1.200.000					
JUNIO	\$1.200.000	\$600.000				
JULIO	\$1.200.000					
AGOSTO	\$1.200.000					
SEPTIEMBRE	\$800.000	\$266.400	\$866.400	\$75.030	\$433.200	
TOTAL PARCIAL	\$10.400.000	\$866.400	\$866.400	\$75.030	\$433.200	
GRAN TOTAL						\$12.641.030

De conformidad con los cuadros anexos, los salarios y prestaciones sociales que se le debieron reconocer al demandante, ascienden a la suma de \$23.111.742, cifra de dinero a la cual se le habrá de descontar lo ya cancelado al reclamante y que corresponde a \$17.924.399, por lo que se tiene que se le adeuda al pretensor, la suma de **CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$5.187.343)**, los cuales se imputan al reajuste de salarios y prestaciones sociales,.

Aportes al sistema general de pensiones

En el plenario, obra la historia laboral del actor en Protección S.A., apareciendo cotizaciones realizadas por el Consorcio DM 016, de septiembre del 2013 a mayo del 2014, reportando 30 días por mes, excepto por mayo del 2014, que se registran aportes por un solo día, apareciendo como IBC \$1.200.000 –ver documento 01.expediente completo escaneado digital folio 24-.

De conformidad con las condenas impuestas, se ordenará a DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S., procedan a realizar los aportes en pensiones a favor del demandante a Protección S.A. que era el fondo en el cual se encontraba afiliado el mismo o al fondo en el que se encuentre afiliado actualmente, por los periodos comprendidos entre el 14 y el 31 de agosto del 2013 y el 2 de mayo al 20 de septiembre del 2014, sobre un IBC de \$1.200.000.

En cuanto a la sanción moratoria del artículo 65 del CST

Señala la Sala que el no pago de los salarios y prestaciones sociales, fue calificado por el legislador de tiempo atrás, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del decreto legislativo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2001, en los siguientes términos:

“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.

En este tema, ha sido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática.

En este sentido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó *“La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016).”*

En esta perspectiva lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia Radicación 32529 de 2009, así:

“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria “... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador”, porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción”.

Lo anterior resulta razonable, además, teniendo en cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles, justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario, competen exclusivamente al empleador.

Debe decirse, también, que la Corte Suprema ha señalado que ello no comporta una presunción de mala fe, que resulta contraria al artículo 83 de la Constitución Política, para recordar que los jueces ordinarios labores deberán, en todo caso, valorar la conducta del empleador, cuestión que es distinta a considerar que al trabajador le corresponda acreditar la mala fe de su empleador en el desconocimiento de sus derechos, para obtener el pago de la indemnización.

Es así como en la sentencia SL11436 del 29 de junio de 2016, se reiteró la sentencia CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 32416, en la que se estableció:

“Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición

de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo Radicación n° 45536 26 asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política”.

Frente esta sanción, se anota que la parte accionada no demostró en el proceso que su actuación estuvo precedida de buena fe, por lo tanto resulta procedente la condena por este concepto, no obstante, teniendo en cuenta que el actor no instauró la demanda el 28 de septiembre de 2016 y el vínculo laboral feneció el 20 de septiembre de 2014, esto es por fuera de los 24 meses que señala la norma en cita, solo procede el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima certificada para los créditos ordinarios liquidados sobre el reajuste reconocido en el ítem anterior, a partir del 20 de septiembre de 2014.

Frente a la sanción del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En este caso no se acreditó la afiliación del accionante a un Fondo de Cesantías, debiendo haberse consignado las cesantías del 2013, antes del 15 de febrero de 2014, lo que no ocurrió, haciéndose, en principio, acreedor el empleador a la referida sanción, sin embargo, nótese que en el interrogatorio de parte el accionante aceptó que le fueron canceladas las cesantías de esa calenda, de donde se desprende que en lo que concierne a esta sanción, no puede predicarse la mala fe del empleador, quien si bien no dio cumplimiento a la obligación legal, ello no se da con la pretensión de burlar el derecho del demandante a esta prestación, pues la misma le fue pagada en forma oportuna.

En cuanto a las cesantías del 2014, las mismas no era obligación consignarlas, por cuanto la relación laboral finiquitó en dicha calenda, por lo que tampoco procedería aplicar sanción por su no consignación.

Sobre la solidaridad existente entre las codemandadas

El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa:

“Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.

Respecto de la figura jurídica de los Consorcios, en reciente pronunciamiento expedido por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinario, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en sentencia del 10 de febrero del 2021, SL 462 (81104), se indicó que los Consorcios no son personas jurídicas, así:

... “En primer lugar, es necesario recordar que las uniones temporales y los consorcios son figuras jurídicas concebidas en el artículo 7.º de la Ley 80 de 1993, en virtud de las cuales dos o más personas pueden presentar de manera conjunta una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. De acuerdo con lo anterior, se trata de agrupaciones de contratistas u organizaciones empresariales que no configuran una persona jurídica nueva e independiente respecto de los miembros que las integran.

No obstante que carecen de personalidad jurídica, el artículo 6.º de la Ley 80 de 1993 les otorga plena capacidad para contratar, premisa que arroja una primera conclusión: para poseer capacidad jurídica contractual no es requisito ser persona moral, pues como ocurre con los consorcios y uniones temporales, entidades sin personería jurídica, la ley los considera legalmente capaces para efectos contractuales”...

Aduce la apoderada de la codemandada Invías, que respecto de su representada no se puede declarar la solidaridad en las condenas impuestas, pues el actor desistió de la acción frente al Consorcio, siendo de éste, frente a

quien se predicaba la solidaridad y no de los consorciados, toda vez que el Invías no ha suscrito ningún contrato con éstos, sin embargo, se aparta la Sala de esta conclusión, por cuanto es claro que para la fecha de constitución del Consorcio DM 016, este no era una persona jurídica independiente de los consorciados y las obligaciones derivadas del accionar de éste, recaen en quienes lo conforman, esto es, en las consorciadas DPC Ingenieros S.A.S. y MS Ingenieros Colombia S.A.S, por lo que si es dable predicar la existencia de la solidaridad de Invías, en los conceptos que se deben reconocer al actor.

Costas en esta instancia a cargo de la codemandada Invías.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se MODIFICA **el numeral primero** de la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral de Circuito de Medellín, el 19 de Enero del 2021, en el proceso ordinario instaurado por el Señor HENRY DE JESÚS LÓPEZ MARÍN en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, DPC INGENIEROS S.A.S. y MS INGENIEROS COLOMBIA S.A.S. y en su lugar:

- a) Se DECLARA que entre el señor HENRY DE JESÚS LÓPEZ MARÍN y el CONSORCIO DM 016 conformado por las sociedades DPC INGENIEROS S.A.S. y MS INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., existió una relación laboral entre el 14 de agosto del 2013 y el 20 de septiembre del 2014.

- b) Se DECLARA que el INVÍAS es solidariamente responsable de los conceptos reconocidos a favor del actor.
- c) Se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, DPC INGENIEROS S.A.S. Y MS INGENIEROS COLOMBIA S.A.S., de manera solidaria, a cancelar al actor la suma de **CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$5.187.343)**, por concepto de reajuste de salarios y prestaciones sociales.
- d) Se CONDENA a las demandadas en forma solidaria a realizar los aportes en pensiones a favor del demandante a Protección S.A. o al fondo en el que se encuentre afiliado actualmente, por los periodos comprendidos entre el 14 y el 31 de agosto del 2013 y el 2 de mayo al 20 de septiembre del 2014, sobre un IBC de \$1.200.000.
- e) Se CONDENA a las accionadas en forma solidaria a pagar al accionante los intereses moratorios a la tasa máxima certificada para los créditos ordinarios, de conformidad con el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, sobre el reajuste adeudado por concepto de salarios y prestaciones sociales en cuantía de \$5.187.343, liquidados a partir del 20 de septiembre de 2014 y hasta la fecha del pago de la obligación.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Costas en esta instancia a cargo de la parte codemandada INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, se fijan agencies en derecho en la suma de \$908.526.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior queda notificados a las partes por estados, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No. **79** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 10 de MAYO de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario